

**NUE ACUM 103 y 164-A-2018 (RC)**

**Vega Cruz contra Corte Suprema de Justicia (CSJ)**

**Resolución definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las quince horas con treinta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve.

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Herbert Danilo Vega Cruz**, en adelante “el apelante”, en contra de las resoluciones emitidas por la Oficial de Información Interina de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, bajo las referencias UAIP/3025/RR/651/2018 (3) y UAIP/3161/RR/1015/2018 (2), de fechas veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y ocho de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente.

***1. Descripción del caso***

I. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, **Herbert Danilo Vega Cruz** presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **CSJ**, una solicitud de información, en la que requirió información concerniente a “auditorías realizadas en la oficina respectiva del Órgano Judicial al almacén de depósitos de decomisos durante los años 2010 al 2017”.

El veinte de julio de ese mismo año, el apelante presentó otra solicitud de información ante la UAIP de la **CSJ** en la que requirió una “certificación de la transcripción y video de las grabaciones magnetofónicas de las últimas 20 sesiones del pleno de la Sala de lo Constitucional hasta antes del 16 de julio de 2018”.

Para ambos casos, la oficial de información interina de la **CSJ** resolvió declarar la inexistencia de lo relacionado en los párrafos que anteceden. Esto debido a que las unidades administrativas correspondientes alegaron que lo requerido nunca ha sido generado. Además, para el caso de la segunda solicitud, se explicó que no existe normativa que obligue al ente a generar las grabaciones correspondientes.

En ese contexto, el apelante interpuso los recursos respectivos, mismos que fueron admitidos por el Instituto, y debido a la similitud advertida entre las pretensiones y la identidad de partes procesales, durante la tramitación del procedimiento, se aplicó la figura de la acumulación.

**II.** Durante la etapa de instrucción, la **CSJ** a través de su apoderada —debidamente acreditada—, rindió los informes de ley para ambos casos, en los cuales ratificó lo actuado por la oficial de información interina durante la tramitación y resolución del procedimiento de acceso de la información pública. Además, en lo relacionado a la primera apelación (NUE 103-A-2018), ofreció como prueba documental el memorándum de referencia DAI-004/2019 de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Coordinador de la Unidad de la Dirección de Auditoría Interna de la **CSJ**, mediante el cual afirma que no existe ninguna disposición legal o administrativa que establezca la obligación de realizar auditorías periódicamente a los “almacenes de depósitos de decomisos”.

**III.** En esta línea de ideas, finalizada la etapa de instrucción, se celebró la audiencia oral en la fecha y hora señalada, con la comparecencia del apelante y la apoderada del ente obligado. En dicha actuación, las partes no alegaron la existencia de algún incidente que impidiera la realización de la audiencia ni ofrecieron alguna prueba distinta a la que constara en el expediente. Posteriormente, en la etapa de alegatos, las partes ratificaron sus posturas. Asimismo y según consta en el acta de audiencia oral, la apoderada de la **CSJ** solicitó una copia del video tomado en dicha audiencia.

**IV.** Agotadas las actuaciones anteriores, este Instituto advirtió que no contaba con los elementos suficientes encaminados a crear certeza razonable para emitir un pronunciamiento de fondo, específicamente en lo relacionado a las auditorías internas al Almacén de Depósitos de Decomisos. Por ello, realizó diligencias para mejor proveer, mismas que consistieron en consultar a la **Corte de Cuentas de la República (CCR)** sobre la posible existencia de algún informe de auditoría interna realizada en el almacén mencionado durante el periodo de 2010 al 2017, por la unidad competente de la **CSJ**.

En respuesta a lo anterior, el seis de mayo del presente año, la Presidenta de la CCR remitió escrito en el que comunicó sobre las instrucciones giradas para indagar en los archivos de esa institución con el fin de conocer si se ha recibido la información relacionada anteriormente; siendo que el nueve de este mes y año, la funcionaria mencionada confirmó a este Instituto la inexistencia de informes de auditoría en los almacenes de depósitos de decomisos en el periodo consultado.

## **2. Análisis del Caso**

Para resolver la controversia se analizará el caso de la siguiente manera: Breve referencia al derecho de acceso a la información pública (DAIP) (I); Análisis sobre la inexistencia de la información como una de las excepciones al DAIP contempladas por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) (II); Análisis sobre la admisibilidad de la prueba ofertada por la CSJ (III); y, aplicación al caso en concreto (IV).

I. En tal sentido, es preciso recordar que el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, reconocida tanto nacional como internacionalmente en basta jurisprudencia. Por lo tanto, corresponde a este Instituto, como garante del derecho de acceso a la información, realizar la labor de armonización y determinación del alcance de tal derecho, así como la ponderación cuando este entre colisión con otros derechos fundamentales con cuya esfera de aplicación interactúa, especialmente cuando deba pronunciarse sobre la validez de restricciones a dicho derecho.

II. Basta jurisprudencia nacional e internacional reconoce como derecho humano al derecho de acceso a la información pública, sin embargo es necesario reconocer que, como todo derecho, el DAIP no es absoluto puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio; no obstante, los límites del derecho de acceso a la información no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar previamente establecidos por el legislador, de esta manera se previene que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información. En este mismo orden de ideas, como consecuencia del principio de máxima publicidad los entes obligados deben demostrar, a través de medios probatorios idóneos, la implementación de medidas restrictivas del DAIP.

En tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 73 de la LAIP, incluso en casos en que se declare la inexistencia de la información solicitada, corresponde al ente requerido demostrar materialmente tal supuesto. De tal forma, corresponde a quien ejerce como Oficial de Información realizar las acciones necesarias para localizarla y dejar constancia de la labor realizada; como consecuencia, la mera alegación sobre la no localización de la información resulta insuficiente para declarar legalmente su inexistencia.

Asimismo, aún en los supuestos en que se demuestre la inexistencia de la información, el ente puede verse en la obligación de producirla para su entrega, por ejemplo cuando el ente ha incumplido un mandato legal de producción de la información. Por tanto, la declaratoria de inexistencia de la información, no justifica la inactividad del ente en su búsqueda, al contrario, le impone la obligación de realizar acciones positivas orientadas a su ubicación o producción cuando resulte necesario.

Aunado a lo anterior, es procedente señalar las causales que este Instituto ha establecido para la configuración de dicha figura: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.

**III.** En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones otorgadas por las partes; es decir, constituye una actividad a instancia de parte que tiene como finalidad la comprobación de los hechos controvertidos. El Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) contempla el derecho a probar como el derecho que tienen las partes de probar sus afirmaciones, a fin de que estas sean tomadas en cuenta al momento de emitir resolución sobre los hechos controvertidos que sean fundamento de la pretensión.

En este contexto, el CPCM contempla dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: la pertinencia y la utilidad. En cuanto a la pertinencia, el Art. 318 del CPCM establece que no deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la utilidad, el Art. 319 del mismo cuerpo normativo contempla que no deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Ahora bien, todo lo que se decida incorporar al expediente como documentos que ayuden a este ente colegiado a tener certeza necesaria para resolver el fondo del asunto, deben cumplir con los extremos relacionados en el párrafo que antecede. En este orden de ideas, se describirá la documentación que siguiente:

1. El ente obligado ofreció como prueba documental, el memorándum de referencia DAI-004/2019 de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Coordinador de la Unidad de la Dirección de Auditoría Interna de la CSJ, mediante el cual afirma que no existe ninguna disposición legal o administrativa que establezca la obligación de realizar auditorías periódicamente a los almacenes de depósitos de decomisos.

En ese sentido, de conformidad a lo establecido en el Art. 317 del CPCM, se admite como prueba la documentación antes citada debido a que son útiles y pertinentes, pues las mismas guardan una relación directa con el objeto de la controversia.

2. En cuanto a lo analizado a folio siete del expediente administrativo 3161-2018 (2), en el cual consta la nota emitida por la Secretaria de la Sala de lo Constitucional interina de la CSJ donde se informa que lo relacionado al requerimiento “certificación de la transcripción y video de las grabaciones magnetofónicas de las últimas 20 sesiones del pleno de la Sala de lo Constitucional hasta antes del 16 de julio de 2018”, no se encuentra en los archivos, en virtud de que las sesiones del pleno de la Sala de lo Constitucional no son registradas en audio ni video.

En ese sentido, se tiene dicha nota por incorporada al presente procedimiento, dado a que es útil y pertinente, pues la misma guarda una relación directa con el objeto de la controversia.

3. Por último, en cuanto a las diligencias para mejor proveer realizadas por este Instituto, es oportuno incorporar la nota remitida por la Presidenta de la CCR, en la que confirmó a este Instituto la inexistencia de informes de auditoría en los almacenes de depósitos de decomisos en el periodo consultado. Esto debido a que la misma guarda una relación directa con el objeto de la controversia.

En consecuencia, con base a los elementos de prueba incorporados, valorados conjuntamente, y conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos: (i) Que no constan en los archivos de la CSJ ni de la CCR la información relativa a las auditorías a almacenes de depósitos en el periodo solicitado; y, (ii) que no constan en los archivos de la CSJ grabaciones en audio ni video de las sesiones de pleno de la Sala de lo Constitucional.

IV. Planteado lo anterior, compete a este Instituto analizar si la inexistencia alegada para ambas solicitudes debe ser confirmada o, por el contrario, procedería la revocatoria de la o las

resoluciones que en este acto se pretenden impugnar. Para tales efectos, se estudiarán los requerimientos, según orden cronológico de presentación:

A. En primer lugar, corresponde verificar la inexistencia de la información relativa a las “auditorías realizadas en la oficina respectiva del Órgano Judicial al almacén de depósitos de decomisos durante los años 2010 al 2017”. Para este punto, el ente obligado ha presentado como medio probatorio, el memorándum emitido por el Director de Auditoría Interna de la **CSJ**, en el que señala que no existe obligación legal para realizar auditorías al almacén de depósitos. Aunado a ello, las diligencias realizadas con la CCR, comprueban que efectivamente esta información nunca ha sido generada por la **CSJ**. En tal sentido, resulta necesario confirmar la inexistencia de este requerimiento.

No obstante, el IAIP considera importante pronunciarse sobre lo alegado por el ente obligado respecto de la ausencia de un mandato legal para realizar auditorías a ese almacén; puesto que afirman que auditan a las unidades que consideran críticas para el funcionamiento del Órgano Judicial. Al respecto, es ineludible mencionar que la Ley de la CCR contempla en la Sección II de su Capítulo IV, la organización, independencia, coordinación de labores, emisión de informes y el acceso irrestricto de las unidades de auditoría interna para las entidades y organismos a que se refiere el inciso primero del Art. 3 de esa ley. Específicamente, el Art. 36 establece que estas unidades presentarán a la CCR un plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal, debiendo informar por escrito y de inmediato cualquier modificación que se le hiciere.

De ello se colige que, si bien la Ley de la CCR no estipula taxativamente qué unidades de cada entidad deberán ser auditadas, esto **no habilita** a la Auditoría Interna de la **CSJ** a que decida de forma discrecional, cuáles serán las únicas dependencias que se auditarán, según se consideren “críticas” o no para el funcionamiento del Órgano Judicial. Esto, además, tiene su sustento en el principio de legalidad –en sentido positivo–, que reviste al servicio público; principio que, a su vez, la misma **CSJ** a través de la Sala de lo Constitucional ha establecido que “en su vinculación positiva consiste básicamente en la idea rectora del ordenamiento jurídico que los funcionarios estatales, quienes ejercen las potestades públicas, se deben someter a lo prescrito en las normas del

ordenamiento jurídico lo que permite robustecer el concepto básico inherente al Estado Constitucional de Derecho<sup>1</sup>”.

Por último, este Instituto es enfático en aclarar que pese a la existencia de un mandato legal para auditar las operaciones, actividades y programas de la entidad y sus dependencias –inciso segundo, Art. 34 de la LCCR–, se reconoce que la ley en mención atribuye a la CCR la potestad de velar por su cumplimiento, nominándola como organismo superior de control. Por ello, para el caso que nos atañe, y en aras de transparentar la labor realizada por la Administración Pública, incluyendo al Órgano Judicial, es oportuno advertir a la Corte de Cuentas de la República, sobre esta situación para que, dentro del ámbito de sus competencias constitucional y legalmente otorgadas, realice las gestiones que considere oportunas, para que la **CSJ** planifique sus auditorías apegadas a la legalidad y no a la discrecionalidad del funcionario correspondiente.

**B.** Por último, en lo referente al requerimiento relativo a la certificación de la transcripción y video de las grabaciones magnetofónicas de las últimas 20 sesiones del pleno de la Sala de lo Constitucional hasta antes del 16 de julio de 2018, es importante retomar el criterio resolutorio de este Instituto, en la resolución emitida en el procedimiento conocido bajo la referencia NUE ACUM 186 y 187-A-2017 (HF), en el que se confirmó la inexistencia de esta información debido a que no existe norma alguna que exija a la Sala de lo Constitucional, llevar un registro o soporte en audios –a lo cual se incluyen las grabaciones de videos– de cada sesión, razón por la que no están obligados por ley a documentar las sesiones en formato magnetofónico. En consecuencia, si la información no existe, procede confirmar su inexistencia. No obstante, es importante señalar que existe obligación por parte de la CSJ respecto a las grabaciones de la Corte Plena en virtud del Art. 12 del Reglamento Interno de la CSJ.

Así las cosas, se confirman las resoluciones emitidas por la Oficial de Información Interina de la **CSJ**, bajo las referencias UAIP/3025/RR/651/2018 (3) y UAIP/3161/RR/1015/2018 (2), de fechas veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y ocho de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente.

**V.** Finalmente, respecto a la petición de la apoderada de la **CSJ** sobre una copia del video tomado durante la Audiencia Oral, celebrada en la Sala de Audiencias de este Instituto a las diez

---

<sup>1</sup> Sala de lo Constitucional, Sentencia Definitiva del proceso de Amparo N° 461-199, de fecha 26-VI-2000.

horas del veintiocho de marzo de este año, se estima oportuno declarar ha lugar su petición de conformidad con el Art. 166 del Código Procesal Civil y Mercantil; por lo que la copia del video solicitado estará disponible para ser entregada desde la notificación de la presente resolución, en las instalaciones de este Instituto y por la persona peticionaria.

### ***3. Decisión del caso***

**Por tanto**, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base a los Artículos 94, 96 letra “c” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) **Confirmar** las resoluciones emitidas por la Oficial de Información Interina de la **Corte Suprema de Justicia**, bajo las referencias UAIP/3025/RR/651/2018 (3) y UAIP/3161/RR/1015/2018 (2), de fechas veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y ocho de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente.

b) **Informar** a la Corte de Cuentas de la República sobre las actuaciones del Coordinador de la Unidad de la Dirección de Auditoría Interna de la **Corte Suprema de Justicia**, en relación a lo contemplado en la Sección II del Capítulo IV de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. Esto para los fines correspondientes.

c) **Tener por recibidas** las comunicaciones presentadas por la presidenta de la Corte de Cuentas de la República en fechas seis y nueve de mayo de dos mil diecinueve.

d) **Entregar** a la apoderada de la **Corte Suprema de Justicia**, una copia del video de la audiencia oral relacionada con el presente procedimiento y celebrada a las diez horas del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

e) **Devolver** a la oficial de información de la **Corte Suprema de Justicia**, el expediente administrativo relacionado con el presente caso, una vez esta resolución adquiera estado de firmeza. Dicho expediente administrativo deberá ser retirado en las oficinas de este Instituto por dicha servidora pública o persona debidamente autorizada.

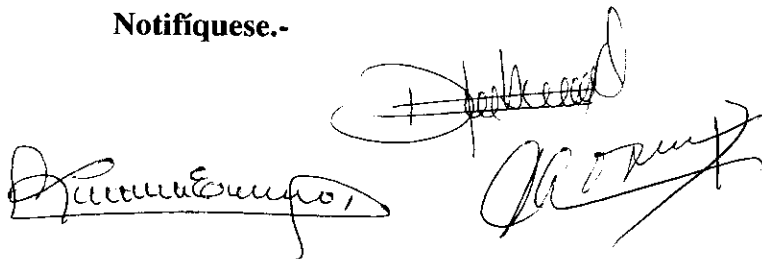
f) **Hace saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.



**g) Trasladar** definitivamente el presente expediente al archivo institucional una vez esta resolución adquiriera estado de firmeza.

**h) Publicar** esta resolución oportunamente.

**Notifíquese.-**

Three handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written horizontally. The signature in the middle is written above the signature on the right. The signature on the right is written horizontally.

**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA  
SUSCRIBEN**

GC/CC

